PRESIDENCIA DE LA NACION - PROCESO DE SELECCION DE CARGOS CON FUNCION EJECUTIVA - RECURSO JERARQUICO

- Los participantes en un proceso de selección, tienen un interés legítimo y no un derecho subjetivo a ser designado. En el caso, la selección de postulantes se llevó a cabo mediante la conformación de una "terna", entre cuyos integrantes figura la recurrente. La autoridad competente del área a la que corresponda la función a cubrir, "podrá" seleccionar al candidato entre los integrantes de la terna elevada.

- Los integrantes de la "terna" de postulantes, se encuentran en un pie de igualdad para la cobertura del cargo de que se trata, pudiendo la autoridad con facultades para designar personal, elegir dentro de la misma o declarar desierto el concurso en el caso de considerar que ninguno de los ternados reúne los requisitos exigidos por el perfil del cargo.

BUENOS AIRES, 16 de octubre 2001

SEÑOR SUBSECRETARIO:

I.— Tramita en estos actuados un proyecto de decreto por el que se rechaza el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la señora ..., contra la Resolución N° 1362, del 29/9/97, del registro de la ex SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, acto por el que entonces se designó al señor ... en el cargo de Director de Acción Federal, Nivel B Grado 0 — Función Ejecutiva IV—, luego de realizado el pertinente Sistema de Selección en el cual también participara la dicente.

II.— La fundamentación del recurso radica en que —según expresa a fs. 1/7— al señor ... se le confirió, en el mes de febrero de 1997, el ejercicio provisorio de las funciones inherentes al cargo involucrado, con la clara intencionalidad de beneficiarlo, posicionándolo anticipadamente en el referido cargo directivo en relación al concurso que se realizaría seis meses después, procedimiento cuyo desenlace dice que estaba preparado.

Desenvuelve su agravio en dichos términos, tildando el acto que ataca —entre otros calificativos— de nulo de nulidad absoluta e insanable; por carecer de fundamentos; por ser irrazonable; arbitrario y violatorio de sus derechos constitucionales.

III.— De acuerdo a las constancias del expediente la pretensión en trámite fue oportunamente analizada, habiéndose inclusive dispuesto su apertura a prueba, ordenándose la producción de aquéllas que luego de ser debidamente meritadas fueron consideradas conducentes a los fines del proceso de selección atacado; dando origen al dictamen que sobre el particular elaboró el servicio jurídico del área involucrada a fs. 357/59 y vta., el cual concluye inclinándose por el rechazo hoy en consulta, postura que se reitera mediante sendos pronunciamientos obrantes a fs. 46 y 55 del Expediente N° 5085/00, respectivamente, remitiéndonos a todos ellos en honor a la brevedad, señalando que esta Oficina Nacional comparte los términos allí vertidos en cuanto a la no existencia de reparos que obstan a la procedencia del acto ahora en gestión.

En efecto; la comentada reconsideración fue oportunamente rechazada mediante Resolución N° 3052, de fecha 26/12/00, de la ex Secretaría mencionada en el primer párrafo del presente, cuyos Considerandos ilustran sobradamente sobre el contenido de la impugnación en análisis, no existiendo mayores argumentos a esgrimir en favor de la postura adoptada, la cual obedece a los elementos colectados en el expediente.

Ello es así habida cuenta que —sin perjuicio de lo hasta aquí reseñado— luego de dictada la Resolución indicada en el párrafo que antecede, la reclamante fue fehacientemente notificada a fin de mejorar y/o ampliar los fundamentos de su queja, facultad que le confiere el artículo 88 de la RPA de aplicación en la especie, habiendo vencido el plazo de cinco (5) días que a tal efecto le otorga el ordenamiento legal sin que efectivamente haya ejercido la prerrogativa de ley.

En definitiva; no se han aportado nuevos o mayores elementos de juicio que autoricen un apartamiento de la decisión adoptada, siendo ello motivo suficiente para mantener el rechazo propiciado ante la ausencia de probanzas que conmuevan el decisorio objeto de recurso.

IV.— Complementariamente, y en lo que al tema decidendum se refiere, no puede soslayarse que si bien la recurrente pudo verse subjetivamente afectada por el resultado del concurso, al no habersele adjudicado, dicha circunstancia no implica que objetivamente le asista prelación alguna por sobre los demás participantes, a quienes les asisten los mismos derechos.

Los participantes en un proceso de selección tienen un interés legítimo y no un derecho subjetivo a ser designados.

En el caso en estudio, la selección de postulantes se llevó a cabo mediante la conformación de una terna, entre cuyos integrantes figuraba la quejosa.

En tal sentido, la calificación obtenida por cada uno, así como el orden de prelación en el que dicha terna fue elevada a consideración de la funcionaria con facultades para resolver sobre el particular, no le otorga un crédito con preferencia tal que pueda desnaturalizar la decisión que en definitiva se haya adoptado como resultado del concurso.

Refuerza lo argumentado el texto mismo del artículo 42 del Anexo I del Decreto N° 993/91, el cual dispone que:

“La autoridad competente del área a la que corresponda la función a cubrir podrá seleccionar al candidato entre los integrantes de la terna elevada”.

En efecto, tal como señalara en reiteradas oportunidades la ex Dirección Nacional del Servicio Civil todos los integrantes de la terna se encuentran en un pie de igualdad (Dictamen N° 849/95).

A mayor abundamiento, cabe destacar que la autoridad facultada para designar puede, asimismo, declarar la deserción del concurso en el caso de considerar que ninguno de los ternados (léase también seleccionados) reúne los requisitos exigidos por el perfil del cargo.

V.— Al margen de lo expuesto, y como bien lo señala la Procuración del Tesoro de la Nación a fs. 50 y vta., debe recabarse el dictamen previo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, en función de la obligatoriedad que marca el artículo 7° inciso d) de la L.N.P.A. cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.

En esa tesitura, los presentes obrados deben necesariamente ser girados a la órbita de la premencionada Dirección a fin de que se expida sobre el particular (conforme surge de fs. 373, último párrafo), para luego de ello — si fuese menester— remitir el expediente a jurisdicción del Alto Organismo Asesor solicitándole su opinión en los términos del artículo 92 de la L.N.P.A., continuándose así el procedimiento de estilo.

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

EXPTES. NROS. 6747/97 Y 5085/00 - SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO N° 1980/01